

Id Cendoj: 35016340012000100815
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 1
Nº de Recurso: 731/1998
Nº de Resolución: 329/2000
Procedimiento: SOCIAL
Ponente: HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIB. SUPERIOR JUSTICIA SALA SOCIAL

LAS PALMAS

SENTENCIA: 00329/2000

ROLLO Nº RSU 731 /1998

40125

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

En LAS PALMAS a veintiocho de abril de dos mil.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Ilmos. Sres. MARIA JESUS GARCIA HERNÁNDEZ, Presidente, HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, MANUEL MARTIN HERNÁNDEZ CARRILLO, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por ADMON. CDAD. AUTONOMA DE CANARIAS contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de Galdar de fecha 27.04.1998, dictada en los autos de juicio nº 76/98 en proceso sobre PRESTACIONES, y entablado por Dª. Leonor frente a ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EsPonente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 1º) La demandante Dª Leonor , nacida el 2 de Febrero de 1942, solicitó en fecha 24 de Octubre de 1997 pensión de invalidez no contributiva, y por resolución de fecha 27 de Enero 1998 le denegada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias al no estar afectada por un grado de minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 65 por 100. Se le reconoció un grado de discapacidad orgánica o funcional de 42 por 100 por padecer limitación funcional en columna, enfermedad del aparato circulatorio y del sistema endocrino-metabólico y en cuanto a los factores sociales complementarios se evaluaron por el E.V.O. en un 9 suponiendo ello un total de 51 por 100. La demandante efectuó reclamación previa con fecha 19 de Marzo del presente año alegando sustancialmente que las enfermedades que padece deben determinar un mayor grado de discapacidad de

forma que estima alcanzar el mínimo legalmente exigido, sin que hasta la fecha conste que se haya resuelto expresamente. 2º) La baremación de las enfermedades y factores sociales de la actora emitido según detalle por el E.V.O de la Administración demandada el 3 de Febrero de 1997 ha sido la siguiente: a) Factores Sociales Complementarios: -Situación familiar ..3, -Recursos económicos ..2.5, -Edad... 2, -Situación laboral y profesional...-, -Nivel cultural--1.5, - Situación social del entorno...-, TOTAL ..9. b) Grado de discapacidad física: 42. 3º) La demandante padece: Hipertensión arterial con mal control farmacológico con hipertrofia ventricular. Artrosis de manos y pies. Artrosis de rodilla leve. **Fibromialgia**. Diabetes mellitus tipo II. Síndrome ansioso- depresivo. Depresión neurótica que precisa tratamiento en la Unidad de Salud Mental de Canalejas sin buena respuesta al tratamiento. Bronquitis alérgica. No se ha valorado patología psiquiátrica en el informe del EVO.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Estimar la demanda formulada por D^a. Leonor contra la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, condenando a la Consejería demandada a que abone a la actora una Pensión No Contributiva de invalidez, en la cuantía de 36.510 pesetas mensuales a partir del día primero del mes siguiente al que formuló su solicitud, es decir a partir del 1 de Noviembre de 1997, así como dos pagas extras por el mismo importe en los meses de Junio y Noviembre de cada anualidad, pensión que para el año 1.998 asciende a 37.280.- pesetas mensuales.

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda de la actora, y declara que la misma tiene un porcentaje de discapacidad del 65% condenando a la Entidad demandada al abono de la correspondiente prestación no contributiva.

Contra la misma se alza la demandada, formulando el presente recurso de suplicación con base en un motivo de nulidad, otro de revisión fáctica y un tercero de censura jurídica.

Así, en primer lugar y con amparo procesal en el *artículo 191 letra a) de la Ley de Procedimiento Laboral* alega la nulidad de la sentencia por infracción de normas y garantías del procedimiento que le han producido indefensión, al entender que siendo distintas las lesiones de la reclamación previa y la demanda, la reclamación previa no existe, y, en todo caso, ha habido modificación sustancial de la demanda, lo cual le produce indefensión.

A juicio de la Sala el motivo tal y como se articula no se sostiene, en primer lugar porque no hay tal diferencia entre la reclamación previa y la demanda, pues, aunque con expresiones diferentes, los procesos patológicos que en una y otra se describen son los mismos, apareciendo como única diferencia real la referencia a los problemas renales que son recogidos en la sentencia, en segundo lugar por que no ha habido indefensión, ya que la demandada examinó a la actora, conoció la reclamación previa y la demanda y compareció al juicio oponiéndose, lo que excluye toda idea de indefensión; en tercer lugar por si existe reclamación previa formal y, como se dijo, prácticamente coincidente con la demanda, y en cuarto lugar porque la modificación sustancial de la demanda, que no existe, no supone un motivo de nulidad, sino que debe plantearse como un motivo de censura jurídica; y en todo caso, como se ha dicho, no existe, pues la demanda recoge la practica totalidad de las lesiones de la reclamación previa e incorpora el supuesto problema renal que el Juez no acepta.

Además la Sala quiere destacar que, a su juicio, es aplicable a los procedimientos de invalidez no contributiva el criterio sentado por el Tribunal Supremo a propósito de la invalidez contributiva, en sentencia del Tribunal Supremo de 25.6.98 (Ar. 5704), según la cual: "...El argumento utilizado por el organismo recurrente es válido en su aspecto formal, en tanto en cuanto al juego conjunto de los preceptos invocados - *artículo 143.1 de la Ley General de la Seguridad Social* y *artículo 142.2 de la Ley de Procedimiento Laboral* - sitúa, en efecto, al INSS como órgano que legalmente tiene atribuida la función concreta de declarar o denegar las solicitudes de invalidez, y a la jurisdicción laboral como instancia revisora de las decisiones de aquél, de conformidad con un reparto de funciones que es tradicional en nuestro derecho. Lo que conduce a no permitir que la jurisdicción resuelva sobre hechos distintos a los que se desprenden del indicado expediente.

Pero, siendo ello así en el aspecto doctrinal y formal no es menos cierto que el requisito de que sean alegados permita al órgano administrativo valorar sólo los específicamente indicados por el trabajador en

sus alegaciones formales, pues ello impediría en la realidad la función revisora jurisdiccional en cuanto que al solicitante, ajeno a la denominación de sus dolencias o a su gravedad sólo se le puede exigir que las exponga, correspondiendo su valoración y calificación a la correspondiente unidad administrativa. Siendo por ello por lo que una tradición jurisprudencial reiterada no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias nuevas que sean agravación de otras anteriores - SSTS 28 de junio 1986 (RJ 1986, 3755), 30 de junio 1987 (RJ 1987, 4682 y 4684) y 5 julio 1989 (RJ 1989, 5431)-, ni lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después - STS 15 septiembre 1987 (RJ 1987, 6200)- ni lesiones o defectos que existían durante la tramitación del expediente, pero no fueron detectados por los servicios médicos de la entidad por las causas que fueran - SSTS 30 abril 1987 y 23 noviembre 1987 (RJ 1987, 6374) -.

SEGUNDO.- En segundo lugar y con amparo procesal en el *artículo 191 letra b) de la Ley de Procedimiento Laboral* propone la inclusión en el hecho probado segundo de otro párrafo del siguiente tenor literal: "...Con fecha 01.12.97. el Equipo de Valoración y orientación del Centro Base dictaminó con un 51% provisional hasta el 06/1.999 la solicitud de PNC presentada por la interesada, manteniéndose el Dictamen anterior por no aportar informes médicos en los que se reflejen nuevas patologías o empeoramiento de las anteriores presentadas y con fecha 20.04.98 el EVO ratifica otra vez el dictamen anterior por no aportar informes médicos que reflejen empeoramiento o nuevas patologías...".

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el Juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1990) "sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del Juzgador... »); c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del Fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

A la vista de lo expuesto el motivo ha de decaer, pues resulta intrascendente la valoración por la EVO de las lesiones si existían las mismas en el momento del reconocimiento, y ello con apoyo en la jurisprudencia que, se acaba de citar, lo que hace irrelevante la pretensión revisoria.

TERCERO.- En tercer lugar, y con amparo procesal en el *artículo 191 letra c) de la Ley de Procedimiento Laboral* alega la recurrente infracción del *artículo 359 de la Ley ",de Enjuiciamiento Civil* por haber tenido en cuenta la sentencia padecimientos que ni se hicieron constar en la reclamación previa, ni en la demanda, ni fueron apreciados por el EVO.

Todo el apoyo del motivo es que el Juez tiene en cuenta lesiones que apreció el forense, pero el hecho cierto es que las lesiones que aparecen en el hecho probado tercero y que a continuación se describen ("...Hipertensión arterial con mal control farmacológico con hipertrofia ventricular. Artrosis de manos y pies. Artrosis de rodilla leve. **Fibromialgia** . Diabetes mellitus tipo II. Síndrome ansioso- depresivo. Depresión neurótica que precisa tratamiento en la Unidad de Salud Mental de Canalejas sin buena respuesta al tratamiento. Bronquitis alérgica. No se ha valorado patología psiquiátrica en el informe del EVO...") son coincidentes, pues ya en la reclamación previa y de la demanda se contemplan la HTA, los procesos artrósicos, la **fibromialgia** , la depresión, los problemas del sistema endocrino-metabólico, debiendo destacarse que la lesión determinante del incremento de la discapacidad, hasta alcanzar el 65% es la neurosis que viene alegada tanto en la reclamación previa como en la demanda, al hablarse de perturbaciones de conciencia, grave depresión y depresión.

Por ello no cabe hablar de incongruencia, pues el Juez a quo ha estimado las lesiones causantes de discapacidad, alegada en la demanda por lo que el motivo ha de decaer.

CUARTO.- Por último y con el mismo amparo alega infracción del *artículo 144 c) de la Ley General de la Seguridad Social* por entender que el grado de minusvalía no alcanza el 65% para lo cual cuestiona la neurosis.

Ahora bien, ya al resolver el motivo anterior se afirmó la inexistencia de incongruencia y la validez de la valoración de la neurosis.

Lo que hace ahora la recurrente es cuestionar en concreto su existencia, por entender no probada la existencia de aquella enfermedad, alegación que no encuentra apoyo alguno y que supone de hecho cuestionar el hecho probado a través de un cauce inadecuado, pues inalterado el relato fáctico las discapacidades apreciadas por el Juez existen en los términos que este las fija, lo que hace decaer el motivo y lleva a la Sala a desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinentes aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso interpuesto por la ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS contra la sentencia 27.04.1998 dictada por el Juzgado de lo Social de Galdar de esta Provincia la cual confirmamos.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BBV cta número: 3537/000066 n° Rec y año a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 50.000 pts en la entidad de crédito B.B.V. c/c. 2410000066 n° Rec y año clave 4043 oficina Génova 17 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social dirigen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.